Mandatos del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

REFERENCIA:
AL BOL 2/2017

4 de septiembre de 2017

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de conformidad con las resoluciones 34/18, 32/32 and 34/5 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con **diferentes actos de descalificación y hostigamiento por parte de diversas autoridades gubernamentales y universitarias contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), así como con el desalojo forzado de las instalaciones que ocupaba en el interior de la Universidad Mayor San Simón (UMSS)**, en presunta violación del convenio vigente con dicha institución.

CEDIB es una organización civil sin ánimo de lucro basada en Cochabamba y dedicada a la investigación y a la prestación de servicios de información y consulta documental sobre temas sociales de Bolivia y el resto de América Latina. El acervo documental y bibliotecario del CEDIB fue declarado Patrimonio Documental de la ciudad de Cochabamba, mediante la ordenanza N° 4363/2012. A través de sus publicaciones, CEDIB ha fomentado durante 30 años la protección de los derechos económicos y medioambientales en Bolivia, manteniendo un vínculo cercano con los movimientos sociales que existen en el país.

Según la información recibida:

Antecedentes

En diciembre de 1993, el CEDIB y la rectoría de la Universidad Mayor San Simón (UMSS) de Cochabamba firmaron un convenio mediante el cual, entre otras cosas, se acordó que el CEDIB tendría su sede en el interior del campus universitario, a cambio de la prestación de servicios académicos e informáticos. La duración inicial del convenio se fijó en 10 años, con una cláusula de extensión indefinida renovable automáticamente cada 5 años. La terminación del convenio operaría por desacuerdo de alguna de las partes, un año después de la notificación de terminación unilateral, o bien por incumplimiento de alguna de las partes, 180 días después de la notificación de incumplimiento.

Durante los casi 25 años en los que el CEDIB estuvo basado en las instalaciones de la UMSS, el CEDIB mantuvo una relación de estrecha colaboración con la Universidad y la comunidad universitaria, llegando incluso a acuerdos ulteriores con diferentes sub-entidades asociadas a la Universidad, incluyendo la Dirección de Ciencia y Tecnología y el Centro Universitario de Estudios Superiores. Según datos del propio CEDIB, del total de servicios prestados en 2016, un 80% fue a instituciones vinculadas a la UMSS.

La descalificación y el hostigamiento contra del CEDIB

El 8 de agosto de 2015, tras la publicación de un reporte del CEDIB denunciando las políticas de extracción del gobierno boliviano y de otros gobiernos latinoamericanos, el Vicepresidente Álvaro García Linera habría afirmado en un evento público que el CEDIB y otras organizaciones de la sociedad civil reciben dinero del exterior y “mienten para defender los intereses de las grandes empresas extranjeras”. El Vicepresidente habría agregado que dichas organizaciones, de mantener su trabajo político, corrían el riesgo de ser expulsadas de Bolivia.

El 2 de diciembre de 2016, el CEDIB denunció ante la opinión pública una campaña de hostigamiento contra los miembros de su equipo de investigación. Según el comunicado, fotografías y datos personales estaban siendo difundidos en redes sociales desde cuentas anónimas, acusando al personal de CEDIB de la comisión de diversos delitos y llamando a su encarcelamiento. Estos actos se habrían desencadenado después de que CEDIB denunciara el otorgamiento de concesiones de explotación minera en los glaciares de la montaña Illimani.

El 6 de febrero de 2017, mientras CEDIB y otras organizaciones sostenían una rueda de prensa en La Paz para informar sobre su solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrantes del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y grupos mineros presuntamente cercanos al Gobierno habrían intentado tomar por la fuerza la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde se realizaba el evento.

El desalojo forzado de CEDIB de las instalaciones de la UMSS

El 8 de marzo de 2017, abogados de la UMSS se habrían presentado en las instalaciones del CEDIB con el objetivo de obtener información sobre al acuerdo entre la UMSS y el CEDIB. Los abogados habrían exigido asimismo que el director se hiciera presente ante el Rector de la Universidad ese mismo día. Sin embargo cuando el director se presentó más tarde ese día en la sede de la Rectoría, éste no fue recibido.

El 14 de marzo de 2017, atendiendo a la petición verbal de los abogados de la UMSS, el director del CEDIB habría enviado la documentación correspondiente a la validez del convenio interinstitucional ante el Departamento Legal de la

Universidad. El CEDIB adjuntó además una nota solicitando al Rector una reunión para extender el alcance del acuerdo.

El 21 de marzo de 2017, sin aviso previo, el Rector de la UMSS habría enviado una nota al director del CEDIB ordenándole la desocupación de las oficinas en un plazo de 48 horas. La nota habría señalado asimismo que en caso contrario las autoridades universitarias solicitarían el apoyo de la policía para proceder al desalojo. El director del CEDIB respondió ese mismo día argumentando la vigencia del convenio con la UMSS, llamando a respetar el procedimiento de terminación establecido en el mismo, y recordando que el acervo documental del CEDIB se encuentra legalmente protegido.

El 31 de marzo de 2017, el rector habría enviado una carta notariada al CEDIB reiterando su demanda de que las instalaciones fueran desocupadas inmediatamente, advirtiendo de nuevo que en caso contrario se solicitaría el auxilio de la fuerza pública, a lo cual el Director del CEDIB respondió que las acciones extrajudiciales anunciadas pondrían en riesgo el patrimonio documental del CEDIB.

En los primeros días del mes de abril del 2017, el Rector y los abogados de la UMSS habrían afirmado en diversos medios de comunicación que el CEDIB pretendía apropiarse de los predios que ocupa en la UMSS, que nunca pagó el costo de los servicios básicos que recibió, y que adeudaba a la Universidad más de 150,000 dólares. Asimismo, el Rector habría afirmado en medios de comunicación que no se haría responsable si estudiantes universitarios tomaban acciones en contra del CEDIB por su cuenta.

En una conferencia de prensa llevada a cabo el 6 de abril de 2017, el CEDIB negó todas las acusaciones en su contra y dio a conocer la decisión de su directorio de trasladar su patrimonio documental y su equipo fuera de las instalaciones de la UMSS, así como de exigir al Rector de la UMSS el cese de las amenazas de desalojo forzoso. Ese mismo día, el CEDIB envió notas a la Defensoría del Pueblo, al Gobernador de Cochabamba y al Alcalde de Cochabamba solicitando su protección y monitoreo durante el desalojo de las instalaciones, sin recibir respuesta.

El traslado del equipo y el acervo del CEDIB fuera de las instalaciones universitarias se llevó a cabo entre el 7 de abril y el 19 de mayo de 2017. Durante ese periodo, miembros del personal del CEDIB habrían sido constantemente objeto de ataques verbales e incluso de grabaciones no autorizadas.

Expresamos nuestra preocupación ante las alegaciones de descalificación y hostigamiento por diversas autoridades gubernamentales y universitarias contra el CEDIB y su personal, así como por el desalojo forzado y presuntamente carente de fundamento legal de las instalaciones que ocupaba al interior de la UMSS en virtud de un convenio vigente con dicha institución. En particular, nos parece preocupante que dichas acciones,

de confirmarse, parecen enmarcarse en un contexto más amplio de hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos en Bolivia, y en particular de aquellas que han expresado críticas al gobierno.

Estos hechos parecen contravenir lo establecido por los 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Bolivia el 12 de agosto del 1982, que establecen los derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de asociación, respectivamente.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvase proporcionar información sobre las investigaciones en curso en relación con la campaña de hostigamiento contra miembros del equipo de investigación del CEDIB, en las que fueron difundidas fotografías y datos personales suyos, junto con mensajes amenazantes y llamados a su encarcelamiento. Asimismo, sírvase proporcionar información sobre las medidas de protección adoptadas para salvaguardar la reputación y la integridad de los miembros de CEDIB.
3. Sírvase proporcionar información sobre los motivos por los cuales la UMSS forzó el desalojo de las instalaciones que ocupaba el CEDIB al interior del campus universitario, así como sobre los fundamentos legales para hacerlo y las medidas adoptadas para proteger su acervo documental.
4. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para garantizar la existencia de condiciones que aseguren al CEDIB, y a cualquier otra organización no gubernamental, la posibilidad de continuar su trabajo en defensa de los derechos humanos y de expresar opiniones discordantes y críticas sobre las políticas del Gobierno.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas en un plazo máximo de 60 días.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las

personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

David Kaye

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Annalisa Ciampi

Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Michel Forst

Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

Sin pretender prejuzgar la veracidad de estas alegaciones o llegar a una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales relacionadas al caso.

Nos gustaría, en primer lugar, llamar la atención del Gobierno de su Excelencia a los artículos 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Bolivia el 12 de agosto del 1982, que establecen los derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de asociación, respectivamente.

En relación con el derecho de libertad de opinión y de expresión, estimamos pertinente hacer referencia a la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, la cual insta a los estados a garantizar el derecho a la libertad de expresión en virtud de ser un pilar fundamental de una sociedad democrática. La resolución subraya también la importancia del pleno respeto de la libertad de difundir información y la importancia del acceso a dicha información para la participación democrática, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Asimismo, la resolución insta a los Estados a que garanticen que las víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión puedan interponer recursos eficaces para investigar efectivamente las amenazas y actos de violencia, así como los actos terroristas, dirigidos contra los periodistas, incluso en situaciones de conflicto armado, y llevar ante la justicia a los responsables de esos actos, para luchar contra la impunidad.

Con respecto al derecho de libertad de asociación, quisiéramos referirnos a la resolución 15/21 del Consejo de Derechos Humanos, y en concreto, al párrafo operativo 1 donde se “exhorta a los Estados a que respeten y protejan plenamente el derecho de todas las personas a la libertad de asociación y de reunión pacíficas, incluso en el contexto de unas elecciones, y con inclusión de las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y las demás personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción del libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.”

Por otra parte, quisiéramos referirnos a la Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, también conocida como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2, que establecen el derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además del deber de los Estados a adoptar medidas para asegurar dichos derechos y libertades.

Por último, quisiéramos hacer énfasis en el artículo 12, párrafos 2 y 3, de la Declaración, que estipula que el Estado garantizará la protección, por las autoridades competentes, de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.